

El Gobierno no quiere pactos por Filesa

Dice que la propuesta de Duran Lleida daría lugar a una "amnistía encubierta" y Serra pide a CiU que utilice su influencia para resolver el problema de la financiación

Madrid / D16.—El PP no está dispuesto a consensuar con el resto de las fuerzas políticas del país el indulto para los ya encarcelados por el 'caso Filesa', tal y como el pasado domingo propuso el dirigente catalán Josep Antoni Duran Lleida.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes, fue el encargado ayer de confirmar el rechazo de su partido a la iniciativa del líder de UDC, quien también se refirió a la necesidad de acordar una nueva ley de financiación de partidos.

De Grandes afirmó que la propuesta de Duran Lleida daría lugar a "una amnistía encubierta, lo que está prohibido por la Constitución". "La reflexión del político catalán está absolutamente fuera de lugar porque una cosa es la compasión con alguien que entra en la cárcel y otra hacer una reflexión que parezca una amnistía encubierta", añadió.

En la misma línea, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, manifestó estar sorprendida "porque se habla del indulto como si fuera una amnistía general, y los indultos son individuales por naturaleza constitucional". No obstante, De Gante indicó que aunque no comparte la propuesta de Duran Lleida "tampoco voy a criticarla más allá de no compartirla".

Por su parte, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, habló de la necesidad de que "todos seamos escrupulosos con el cumplimiento de la Ley". Desde los micrófonos de Onda Cero, Mayor Oreja se mostró a favor de una nueva ley de financiación de partidos. "Lo primero es que se aborde la financiación de los partidos políticos y pronto, y luego ya los partidos tendrán que establecer si en función de esas planteadas cabe hacer otro planteamiento".

Mientras que el PP cerraba filas en torno a la propuesta de Duran Lleida, el Partido Socialista de Cataluña anunció que su partido pedirá al propio Joaquín Almunia que acuerde con José María Az-



VALORACIONES Narcís Serra, del PSC, durante la rueda de prensa ofrecida ayer, en la que habló de los últimos ingresos en prisión por Filesa.

nar un "pacto global" sobre Filesa.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlament, Joaquim Nadal, afirmó que "los políticos, para no sentirnos tan solos, lo que tenemos que hacer es no perder de vista el run-run de la sociedad, y la sociedad hace mucho tiempo que hace un run-run diferente al que

Serra exige a los partidos políticos que no se limiten a expresar su solidaridad con los encarcelados

hacen los políticos. O volvemos a aterrizar y ponemos los pies en el suelo entre nuestro discurso y lo que la gente reclama, o nos vamos alejando de la sociedad".

Por su parte, el primer secretario del PSC, Narcís Serra, pidió a las fuerzas políticas que no se limiten a expresar su solidaridad personal con los encarcelados

por el 'caso Filesa' sino que admitan que también han cometido irregularidades en su financiación y lleguen a un pacto para evitarlas.

Serra emplazó a los dirigentes políticos catalanes a adoptar un acuerdo en Cataluña, si finalmente se demuestra la imposibilidad de alcanzar este compromiso a nivel estatal.

El dirigente del PSC reclamó también a CiU que utilice su "peso" e "influencia" ante el PP para que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado para 1998 empiece a resolver el problema de la financiación de los partidos políticos dotándoles de más recursos públicos, medida que permitiría que los partidos "no tuvieran que depender de aportaciones privadas ni de los intereses privados".

Duran Lleida matiza su propuesta

El revuelo formado por la propuesta de Duran Lleida sobre la necesidad de llegar a un pacto en el funcionamiento de los partidos, en el que se incluya la concesión del indulto de los encarcelados por Filesa, obligó ayer al presidente de UDC a matizar sus declaraciones. El dirigente catalán negó que hubiera pedido el indulto de los socialistas condenados por la trama Filesa, sino que lo que quería proponer es

"que de una vez por todas nos sentemos en una mesa y acordemos una nueva forma de hacer política. Cambiemos la ley electoral, el sistema de funcionamiento del Parlament, la ley de financiación de los partidos políticos y gastemos mucho menos en las campañas electorales". Duran Lleida afirmó que la propuesta la hace "a título personal" y que "él es muy poca cosa para dar el primer paso".

"La captura de Roldán en Bangkok fue ilegal"

El abogado Eugenio Rubio dice que su patrocinado "estaba condenado antes de la vista" y denuncia las ausencias de Vera, Barrionuevo y Corcuera.

Madrid / D16.—El abogado de Luis Roldán, Eugenio Rubio, cuestionó ayer la legalidad de todo el proceso seguido contra el ex director general de la Guardia Civil y puso como ejemplo la detención en Bangkok. Asimismo, Rubio señaló que Roldán estaba "condenado" antes de la vista y recordó a los "grandes ausentes", en clara alusión a Rafael Vera y los ex ministros de Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera.

Rubio, que ayer expuso su informe definitivo ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, insistió en su "convicción íntima" de la inocencia de su patrocinado —para quien el fiscal pide 32 años de prisión—, de quien dijo que era un hombre "disciplinado y leal" al PSOE.

En opinión del abogado, juzgar a Roldán, silenciar que las constructoras más importantes del país pagaban comisiones y el uso que se hacía de fondos reservados, significará que la sociedad todavía no ha alcanzado la mayoría de edad política.

Dicho esto, el letrado trató de demostrar cómo las cuentas de Roldán fueron utilizadas por el procesado Jorge Esparza para blanquear el dinero que obtenía con sus propios negocios ilícitos y los de las personas de su trama, entre las que citó al ex presidente de Navarra Gabriel Urralburu y el ex consejero de Obras Públicas navarro Antonio Aragón.

Rubio insistió en que el ex director general de la Guardia Civil fue víctima de un "engaño" cuando fue detenido diez meses después de su fuga, y dijo que la "enorme alarma social" que había generado, auspiciada por los grupos políticos, "primó sobre sus derechos fundamentales", en un contexto de "corrupción generalizada", en el que "se prescindió de la ética y la legalidad".